

“Libia: tres Gobiernos en desgobierno”

Juan Bautista Cartes Rodríguez

*Citación: J. B. Cartes Rodríguez, “Libia: tres Gobiernos en desgobierno”, *El Orden Mundial en el Siglo XXI / Fundación África Sur*, 8 de Julio de 2018.

De ser uno de los países más prósperos del continente africano gracias a sus vastos yacimientos petroleros, tras la caída del régimen dictatorial de Muamar el Gadafi, los conflictos superpuestos entre fuerzas islamistas y seculares, tribus, etnias e injerencias exteriores han conducido a un país que ha llegado a contar con tres Gobiernos antagónicos al caos más absoluto.

Las protestas ciudadanas que comenzaron en Túnez en diciembre de 2010 y se extendieron al Egipto de Hosni Mubarak en enero de 2011 llegaron apenas un mes más tarde a la vecina Libia, donde, a diferencia de sus predecesores, las manifestaciones pacíficas rápidamente se convirtieron en un levantamiento armado y sumieron al país en una sangrienta guerra civil. Ante tal situación, la OTAN decidió ejecutar la Resolución 1973 del Consejo de Seguridad de la ONU y emprendió una campaña de bombardeos entre marzo y octubre de 2011 que tuvo un impacto decisivo en la caída del régimen.

En ese momento se creó el Consejo Nacional de Transición (CNT), institución que aglutinaba facciones bastante heterogéneas entre sí, pero que compartían el propósito de derrocar el régimen de Gadafi. A los pocos meses de su creación, logró alcanzar el reconocimiento de la comunidad internacional como Gobierno provisional; sin embargo, tras el asesinato de Gadafi el 20 de octubre de 2011, empezaron a aflorar sus debilidades.

El hecho de que sus integrantes no habían sido elegidos por el pueblo, la ausencia de un proyecto común, así como la incapacidad para desarmar e integrar en el aparato de seguridad del Estado a fuerzas locales y grupos armados que habían jugado un papel destacado en la revolución, se pueden citar entre los factores claves que impidieron al CNT liderar la etapa pos-Gadafi.

Primeras elecciones: los islamistas en el poder

Con una intención clara de remediar tal situación, el 7 de julio de 2012 tuvieron lugar las primeras elecciones democráticas en un país que había vivido 43 años de dictadura militar. Estas elecciones buscaban elegir a los 200 diputados que formarían la futura Asamblea Nacional Constituyente o Congreso General de la Nación (CGN). Con una participación electoral del 62%, la victoria fue para el partido de tendencia liberal Alianza de Fuerzas Nacionales. No obstante, el partido islamista Justicia y Construcción —rama libia de los Hermanos Musulmanes— acabaría controlando el CGN gracias al apoyo de distintos candidatos independientes y de los salafistas. Tras las elecciones parlamentarias, se estableció un nuevo Gobierno en Trípoli encabezado por el liberal Alí Zeidan en el que los ministerios fueron repartidos entre islamistas y liberales.

Durante este periodo, los islamistas, relegados en la etapa anterior, lograron alcanzar un gran poder en el país. Muestra de ello sería la aprobación en 2013 de la Ley de Aislamiento Político —que desfavorecía a los sectores liberales y seculares al impedir ocupar cargos públicos a quienes habían ostentado algún alto cargo durante el régimen de Gadafi— y la sharía como fuente de Derecho.

Por su parte, el entonces primer ministro Zeidan, incapaz de controlar las milicias operativas a lo largo del país, tenía que hacer frente a la fuerte oposición y al bloqueo político de los Hermanos Musulmanes. Tras un intento de golpe de Estado en el que Zeidan llegó a ser secuestrado durante algunas horas por el grupo islamista Sala de Operaciones de los Revolucionarios Libios, su fin en el tablero político llegó en marzo de 2014 cuando un buque con bandera norcoreana negoció la extracción de petróleo directamente con las milicias que controlaban el golfo de Sidra, lo que dio lugar a que este fuera interceptado posteriormente por un buque estadounidense. La crisis política resultante desembocó en una moción de censura contra Zeidan, y el que fuera su ministro de Defensa, el moderado Abdulá al Thani, pasó a ocupar el cargo de primer ministro. Sin embargo, solo un mes después Al Thani dimitiría por amenazas contra su familia y el islamista Ahmad Mitig accedió al cargo en una polémica votación.

A partir de entonces se precipitarán los acontecimientos, en gran medida debido al retorno del que será una de las figuras claves en la guerra civil libia: el general Jalifa Haftar. Jefe del Estado Mayor del régimen de Gadafi, tras ser acusado de traición en el conflicto libio- chadiano (1978-1987), se vio obligado a exiliarse en EE. UU., desde donde regresó para ocupar un alto mando en las operaciones militares del CNT al inicio de las revueltas contra el dictador.

Tras viajar de nuevo a EE. UU., Haftar reapareció en el escenario libio en febrero de 2014 y en un mensaje televisado ordenó la disolución del CGN por su incapacidad para gobernar un país bloqueado por los islamistas y la creación de un “comité presidencial” que gobernaría hasta que se celebrasen nuevas elecciones. Desde el CGN lo tildaron de golpista y sus planes quedaron temporalmente en una mera declaración de intenciones. Haftar recabaría en secreto los apoyos necesarios para lanzar tres meses después, con Mitig como primer ministro, la llamada Operación Dignidad con el objeto de deponer al CGN y derrotar a las milicias islamistas en las que se apoyaba. Así, Bengasi y Trípoli, dos de las ciudades donde los islamistas tenían más poder, fueron bombardeadas, y el CGN, asediado. En esta nueva guerra civil, las fuerzas de Haftar, autodenominadas Ejército Nacional de Libia, contaron con un fuerte respaldo popular y fueron apoyadas por las milicias de Zintan, Warshefana y Nafusa.

Paralelamente, en un nuevo giro inesperado, la Corte Suprema declaró ilegal el proceso de elección de Mitig y, ante la falta de sustituto, a principios de junio de 2014 el cargo pasó de nuevo a manos de Al Thani. No obstante, lo ostentaría por poco tiempo; en unas nuevas elecciones convocadas para el 25 de junio, con la operación militar liderada por Haftar como telón de fondo, los bandos estarían más polarizados que nunca.

Segundas elecciones: escisión irreconciliable entre Trípoli y Tobruk

Con una participación muy baja ante el miedo de violencia armada, las elecciones que buscaban designar a los miembros de la Cámara de Representantes —el nuevo órgano legislativo para sustituir al CGN— las ganaron los partidos seculares, y los islamistas sufrieron un fuerte retroceso respecto a las elecciones de 2012. Debido a que los conflictos entre distintas facciones continuaban en Trípoli, la cámara se trasladó a la ciudad oriental de Tobruk, donde Al Thani forma un nuevo Gobierno con el respaldo de la comunidad internacional. Sin embargo, los islamistas tacharon de fraudulentas las elecciones de 2014 y no reconocieron la legitimidad de la cámara ni del Gobierno de Al Thani. El CGN, cuyo mandato expiró oficialmente el día de las elecciones, se mantuvo como Parlamento y un nuevo Gobierno “de salvación nacional” se constituyó en Trípoli bajo las órdenes del islamista Omar al Hasi.

Al desconcierto de contar con dos Gobiernos y dos Parlamentos —uno en Tobruk y otro en Trípoli— hay que sumarle que, si bien el primero sería el único reconocido internacionalmente, en el plano interno la Corte Suprema libia invalidó también las elecciones de 2014 y, por ende, el Parlamento surgido de ellas. La Cámara de Representantes y Al Thani acusaron a las milicias islamistas que controlaban la capital de influir en la decisión del tribunal y desde Tobruk no se acató el veredicto.

Por su parte, el autodenominado Ejército Nacional de Libia mostró su apoyo tanto a la Cámara de Representantes —o “Parlamento de Tobruk”— como a su Gobierno y se ha erigido en garante de la seguridad de esta parte del país. Mientras, en el bando islamista, como contraofensiva a la operación militar liderada por Haftar, se lanzó la Operación Amanecer Libio con el apoyo de milicias islamistas de Trípoli y de la ciudad portuaria de Misurata. Asimismo, el conflicto que tenía lugar en la región suroeste del país entre las tribus tubu y tuareg —cuyas dinámicas no obedecían al enfrentamiento entre Trípoli y Tobruk— ha sido utilizado por ambos bandos en su propio beneficio: el Gobierno tripolitano ha financiado y armado a los tubus y las fuerzas de Haftar, a los tuaregs.

El Gobierno de Unidad Nacional

Ante el caos reinante, a finales de 2015 se firmará en Sjirat (Marruecos) a instancias de la ONU el denominado Acuerdo Político Libio, en virtud del cual se establecía un Gobierno de Unidad Nacional (GUN) liderado por el secular y abiertamente prooccidental Fayez al Sarraj, quien a su vez pasaría a dirigir el Consejo Presidencial con funciones de jefe de Estado. El acuerdo preveía la creación de un órgano consultivo con sede en Trípoli, el Consejo de Estado, integrado por los representantes del CGN, y la Cámara de Representantes de Tobruk quedaba reconocida como el único parlamento legítimo de Libia. Aunque la mayor parte de la comunidad internacional empezaría a establecer relaciones con el GUN, en el plano interno parecía nacer herido de muerte, pues ni Trípoli ni Tobruk ratificaron el acuerdo.

Inicialmente operativo desde Túnez, el Gobierno de Al Sarraj pudo establecerse en Libia en 2016. Desde entonces, en contra de lo esperado, Al Sarraj ha sabido consolidar su posición de poder y lograr el apoyo de una buena parte de las milicias de Misurata, de las Fuerzas Especiales de Disuasión y de las dos instituciones económicas más poderosas: el Banco Central y la Corporación Nacional del Petróleo. Asimismo, la legitimidad del

nuevo Gobierno se vio reforzada a finales de ese año cuando, tras más de seis meses de ofensiva —respaldada principalmente por las fuerzas aéreas estadounidenses—, la organización terrorista Dáesh fue expulsada de Sirte, ciudad portuaria de gran relevancia geoeconómica, pues en ella se encuentran las principales terminales para la exportación de hidrocarburos del país.

La situación de anarquía tras la caída de Gadafi había sido aprovechada por Ansar al Sharia —‘partidarios de la sharía’—, grupo de ideología salafista, antidemocrático y antioccidental, para establecerse y consolidar su poder en la ciudad de Bengasi, donde en 2012 asaltó el consulado estadounidense y asesinó al embajador. Por su parte, Dáesh se instaló en el país en 2014, concretamente en la ciudad de Derna, donde recabó el apoyo de una buena parte de los miembros del languideciente Ansar. Desde su bastión y aprovechando el vacío de poder en la zona por los enfrentamientos entre Trípoli y Tobruk, logró avanzar hasta Sirte y permaneció allí desde 2015 hasta finales de 2016, cuando la ofensiva liderada por el GUN logró su expulsión. Dicha derrota supuso el retroceso de la organización terrorista en el país, aunque se calcula que aún hay más de un millar de yihadistas actuando en Libia.

Tras su importante victoria en Sirte, el GUN también tuvo que hacer frente a un intento de golpe de Estado por parte del Gobierno tripolitano, liderado entonces por Jalifa al Ghawil. En marzo de 2017 una alianza de milicias que apoyaban al GUN logró lanzar una ofensiva en la que Al Ghawil resultó herido y partió al exilio, lo que convierte a Haftar, aliado del Gobierno de Tobruk, en su principal oponente en el país. De hecho, Haftar y su Ejército Nacional han logrado importantes victorias en los dos últimos años, con el consiguiente debilitamiento del Gobierno de Al Sarraj. Entre estas destacan la toma de Bengasi, el control de las principales estructuras petroleras del país y su victoria sobre la base militar estratégica de Al Jufra, a lo que habría que añadir la consolidación de su autoridad en el este de Libia —a excepción de la ciudad de Derna—.

Unas nuevas elecciones: ¿el fin de la guerra?

De nuevo, ante dos centros de poder antagónicos, llegó del exterior un intento de mediación, esta vez de manos del presidente francés Emmanuel Macron, quien en julio de 2017 auspició que Haftar y Al Sarraj llegasen a un acuerdo por el que ambos se comprometían, entre otros puntos, a la búsqueda de una solución política a la crisis libia, a hacer efectivos los acuerdos de Sjjirat y a la celebración de elecciones “lo antes posible”.

Tras más de diez meses de posiciones enconadas, una nueva reunión entre ambos líderes ha tenido lugar en París el pasado 29 de mayo; sin embargo, tampoco parece que los puntos negociados vayan a cumplirse a corto plazo en este caso. Sin un marco constitucional, una ley electoral acordada ni la seguridad requerida —muestra de ello son los atentados cometidos por milicias cercanas a Haftar contra los paneles electorales y por el Dáesh contra la sede de la Comisión Electoral—, la fecha del 10 de diciembre para la celebración de elecciones en Libia parece, cuando menos, precipitada.

Haftar —en estos momentos, el hombre fuerte de Libia al controlar tanto las principales infraestructuras petroleras como la mayor fuerza militar que opera en el país— no se resiste a contemplar una opción distinta al uso de la fuerza para destruir el “islam político” y las milicias del Amanecer Libio, por lo que el espacio para una negociación real con Trípoli es bastante limitado. A esta primacía de poder en la esfera interna ha de

sumarse el apoyo que le brindan abiertamente Egipto y Emiratos Árabes Unidos y, de manera encubierta, Rusia.

Tras siete años desde el inicio del conflicto armado, el futuro de Libia resulta vacilante; con el deterioro de la salud de Haftar, no parece que haya un sustituto capaz de seguir aunando la amalgama de tribus y milicias que sostienen sus fuerzas militares. Ante este voluble tablero, el presidente estadounidense ha reconocido que no tiene otro interés en Libia más allá de la lucha contra el terrorismo y la UE solo parece estar interesada en proteger sus fronteras. Muestra de ello son las partidas destinadas a formar y financiar a los denominados *guardacostas libios* para que inmigrantes y refugiados subsaharianos no lleguen a las costas europeas. Mientras, los centros de detención inhumanos, dependientes de la milicia de turno, se suceden a lo largo de Libia y subastas atroces de esclavos tienen lugar en los mercados de ciudades como Sabha.